



RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0256/2017

FECHA: 25 de julio de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la reclamación número RT/0256/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que dan origen a esta reclamación se iniciaron el pasado 23 de junio de 2017, fecha en la que la ahora reclamante remitió a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha una solicitud de "acceso a expediente conjunto Matamulas tramitado en Jefatura Minas C. Real".

Mediante resolución de 26 de junio de 2017 de la secretaria General de Economía, Empresas y Empleo de la indicada Consejería, se acuerda inadmitir dicha solicitud. Los argumentos empuados para ello son, en síntesis, los siguientes:

- *De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y el artículo 18.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se inadmitirán a trámite las solicitudes que se refieran a información "en curso de elaboración o publicación general".*

ctbg@consejodetransparencia.es



- La Disposición adicional octava de la Ley 4/2016 establece que se “regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”.
- La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y a la vista de dicha norma, y en especial de los artículos 5 y siguientes, en el momento actual, según la información facilitada por la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se está tramitando un procedimiento que, una vez finalice, será objeto de publicación general.
- Una vez presentado el estudio de impacto ambiental por la mercantil interesada, en su caso, el órgano sustantivo enviará toda la documentación existente al órgano ambiental y en ese momento del procedimiento, este último órgano abrirá un nuevo procedimiento de información pública en el que cualquier ciudadano podrá consultar todo lo actuado.

Frente a esta contestación por la interesada se interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG mediante escrito registrado en esta Institución el 20 de julio de 2017. En síntesis, considera lo siguiente:

- No procede apreciar la causa de inadmisión contenida en los artículos 31.1.a) de la Ley 4/2016 y 18.1.a) de la Ley 19/2013, dado que el procedimiento de EIA, regulado en la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de CLM no contempla nuevo procedimiento de información pública y en relación con el concepto “en curso de elaboración”, dicha elaboración no corresponde a la Administración sino al promotor, en consecuencia, esta parte entiende que no corresponde la aplicación de dicho artículo, siendo lícito el acceso a dicha información.
- No se ha realizado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo la debida ponderación ante la aplicación de un límite al derecho de acceso a la información, tal como explica el Preámbulo de la Ley 19/2013 de TAIBG, consistente en poner en una balanza el interés que se protege con el límite y el interés legítimo que ampara el conocimiento de la información y valorar ambos para decidir, pues en este caso concreto, no se ha tenido en cuenta que quien suscribe forma parte de las 44 personas físicas y jurídicas a cuales debía darse una respuesta en el EIA por haberse realizado alegaciones de especial interés en la fase previa opcional al documento de inicio propuesto por el promotor Quantum Minería, S.L., además de ser representante legal de la Plataforma Si a la Tierra Viva, colectivo vecinal que encabeza la oposición a la implantación de la minería en el Campo de Montiel, por tanto, no existe justificación ni motivación para la denegación al acceso.
- Respecto a la aplicación de la DA 8ª de la Ley 4/2016 TBG- CLM, que establece que “se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen específico de acceso a la información”, en relación con la DA de la Ley 19/2013 LTAIBG concerniente a la aplicación preferente de una normativa específica en materia de acceso a la información, es preciso recordar el criterio interpretativo determinado por la Presidenta del Consejo de



Transparencia, donde establece “el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, previsto en el art 105, letra b, de la Constitución, se rige, primeramente por esta y, en segundo lugar, por “la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación” (CI/008/20015 de 12 de noviembre de 2015).

- *En relación con los argumentos que da la Administración para denegar la entrega de documentos, no son razonables pues el derecho de acceso a la información pública no está limitado en esta materia y no puede haber restricciones, no se está respetando el principio de legalidad ni tampoco el principio de igualdad ante la ley.*

Así pues, si el promotor ha recibido la información relativa a alegaciones y consultas tras cumplirse el plazo de información pública de su proyecto y EIA, para su estudio y posible modificación de ambos, resulta de justicia material proporcionar a los interesados que han alegado igual posibilidad facilitando los datos para ver la forma en la que se cumple con lo indicado en el documento de alcance, y ello en aras de la máxima transparencia.

- *Y a mayor abundamiento, el Defensor del Pueblo ha tratado también esta cuestión de acceso a información, estableciendo en un informe del año 2007, “Por su parte, el solicitante de acceso a la información ambiental no necesita ostentar la condición de interesado en el procedimiento, ni que los documentos pedidos formen parte de un expediente terminado en la fecha de la solicitud, ni que estos obren en un tipo de soporte material determinado. El solicitante de acceso a la información ambiental que actúa el amparo de la Ley 27/2006 debe tener acceso a datos o documentos contenidos en un procedimiento, aunque no ostente la condición de interesado y aunque dicho procedimiento no esté finalizado (...) “... en definitiva, la Ley 27/2006 establece un derecho de acceso a la información mucho más amplio que el fijado al artículo 37 de la Ley 30/1992, y cualitativamente distinto al del artículo 31 de la misma Ley, y ello sobre todo en materia medioambiental, ya sea como causa o efecto....”*

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto “salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas



atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley". Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

"1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias".

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el precitado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar la presente Resolución, la primera cuestión sobre la que ha de centrarse la atención se refiere a la determinación del ámbito de aplicación de la LTAIBG.

La Disposición Adicional Primera, apartado 2, de la LTAIBG regula los procedimientos especiales de acceso a la información señalando lo siguiente:

"Se regirán por su normativa específica y por esta Ley, con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información."

La misma Disposición Adicional, en su apartado 3, dispone que

"esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización".

Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. En efecto, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de



acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

- a. *“El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos*
- b. *Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a.*
- c. *Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.*
- d. *Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.*
- e. *Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f.*
- f. *El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”.*

En definitiva, tal y como se ha considerado en anteriores reclamaciones -entre otras, la número R/0076/2016, de 30 de mayo- teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, este Consejo de Transparencia considera que se debe inadmitir la Reclamación presentada en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al carecer de competencias para entrar a conocer el fondo del asunto debido a la aplicación prevalente de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** la reclamación presentada, por aplicación de los apartados 2 y 3 de



la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda